La Guerra de Agua en Cochabamba: ¿Un Ícono Antiprivatización?

Por David Bonnardeaux

Marzo de 2009

Biografía:

David Bonnardeaux es un consultor freelance experto en desarrollo rural y manejo de recursos naturales. Ha trabajado en proyectos con el Banco Mundial, USAID, CARE y otros organismos alrededor del mundo.

Cuando corría el año 2002, y yo era un joven estudiante del Magister en Gestión del Agua, era de la idea que la privatización de la misma era un error, o al menos era muy discriminatoria. Era una gran inmoralidad pensar en la privatización del agua, debido a que se trataba de empresas sanitarias públicas de países en desarrollo-donde la falta de agua y salubridad inciden fuertemente en la mortalidad infantil-.¹ ¿Cómo una comunidad que vive en la pobreza puede ser forzada a elegir entre darle de comer a sus familias o darles acceso al agua potable? Con el paso del tiempo mis compañeros de estudios y yo hemos podido escuchar convincentes argumentos a favor de las alianzas público-privadas en la industria del agua, sus beneficios, y de lo importante que es fomentarlas. Crece la inversión, aumenta la eficiencia, mejora la administración; las razones eran muchas y legítimas. Estábamos, sin embargo, provistos de visiones muy divergentes acerca del tema del malestar social y del conflicto que aparecería producto de la privatización del servicio público del agua. Las visiones extremas reflejan la polarización que la palabra "privatización" provoca. Privatización del agua: O usted está a favor o está en contra. Aparentemente, no hay términos medios.

Una de las consecuencia de la fallida privatización del agua en Cochabamba , Bolivia, es que ella se ha convertido en una especie de ícono para una variedad de grupos (académicos, ideológicos, organizaciones sociales) quienes se oponen a la privatización como manera de enfocar las cosas. En la mayoría de las discusiones y enfoques académicos, la causa de dicha falla es ambigua: se decía que era responsabilidad de las empresas extranjeras, multinacionales, y con fines de lucro. Análisis posteriores han demostrado que la privatización se ha convertido en un chivo expiatorio para un conflicto que tiene orígenes muy complejos, entre los cuales se encuentran la corrupción local, problemas con un marco regulatorio débil, y la falta de adhesión ciudadana.

Cochabamba, Bolivia: 1997 – 2000

En Cochabamba, la tercera cuidad más grande de Bolivia, la mayor parte de la ciudadanía eran fervorosos detractores de los planes de privatización del servicio sanitario, y llevaron su lucha a las calles a principios del 2000 cuando exorbitantes alzas de tarifa se pusieron en aplicación. La población semiurbana como también la rural, se unieron a esta causa, la cual fue impulsada a su vez por grupos de interés internacional; todos los cuales avivaron las llamas del descontento. El resultado final fue la cancelación del contrato con el consorcio internacional y el retorno de la compañía y sus activos al dominio estatal. Ello también exportó la "guerra del agua" de Cochabamba al plano internacional donde muchos citaron este

_

¹ La Organización Mundial de Salud estima que "la enfermedad estomacal de diarrea por si sola es responsable de un 4,1% del total de enfermedades y la muerte de 1,8 millones de personas al año. Se estima que un 88% de la responsabilidad de estas enfermedades se atribuye a la mala calidad del servicio de provisión de agua, a problemas de sanidad e higiene y afecta principalmente a los niños de los países en desarrollo."

acontecimiento como una justificación para oponerse (y luchar) contra la privatización sanitaria alrededor del mundo.

En 1997, el Banco Mundial le otorgó a Bolivia un monto de 20 millones de dólares para asistencia técnica en temas de reformas regulatorias y de privatización, que incluían la preparación de leyes y regulaciones en los sectores financiero, infraestructura y comercial. Algunos de esos fondos fueron destinados al "Proyecto de Rehabilitación de Aguas y Aguas Servidas en las Principales Ciudades"; el cual tenia por objeto proveer cobertura sanitaria total para Santa Cruz, Cochabamba y La Paz de la forma más eficiente y sustentable posible. Una de las condiciones del Banco para cursar el préstamo era la privatización de las empresas sanitarias, responsables de proveer el agua potable y el tratamiento de las aguas servidas, para las ciudades de la Paz y Cochabamba.

En ese instante, solo el 60% de la población de Cochabamba estaba conectada a la red de agua potable SEMAPA, y solo un 50% era beneficiada con el servicio de recolección de aguas servidas. Aquellos que estaban conectados pagaban del orden de US\$ 0,6 /m3, mientras que aquellos que no estaban conectados (lo cual invariablemente incluía a los más pobres) obtenían el agua desde vendedores a un costo estimado de entre US\$ 1,75/m3 y US\$ 3 /m3.2

Las industrias y los residentes acomodados eran los beneficiados con la mayor cobertura de la red sanitaria y con los subsidios estatales para dicho servicio; en el área de Casco Viejo, por ejemplo, las tasas de conexión eran cercanas al 99%. Mientras tanto, la enorme población de la zona norte como la de los suburbios del sur de Cochabamba mostraban una conectividad a la red sanitaria de menos del 4% en 1992. ³ Numerosos reportes confirman que la ciudad de Cochabamba ha sufrido de cortes crónicos en el servicio de agua potable, con lo cual sus habitantes han tenido que vivir con un inadecuado acceso al agua potable y a la salubridad⁴. El sistema sanitario se ha convertido en uno altamente ineficiente, luego de más de una década con insuficiente inversión en cobertura. El abastecimiento de agua potable es por sólo cuatro horas al día y las pérdidas por filtraciones se estiman en un 43%. El bombeo indiscriminado del agua subterránea para abastecer el consumo humano y la agricultura del área hacen necesario y urgente desarrollar nuevas fuentes de abastecimiento de agua superficial. Frente a esto, el gobierno Boliviano acudió al sector privado, pero no sin antes recibir una fuerte coerción del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El gobierno anterior buscó resolver esta situación privatizando el servicio sanitario SEMAPA y utilizando un proyecto de embalse hidroeléctrico existente

² (Bechtel Corporation, 2002)

³ (UN-Habitat, 2003)

⁴ (Baer, 2008) y (Finnegan, 2002)

(Proyecto Corani)-guiado por el Banco Mundial- el cual fue diseñado para abastecer toda el agua que le faltaba a la ciudad. El proyecto privado Corani fue diseñado para abastecer 4 m3/seg de agua a un costo de 70 millones de dólares (obtenidos enteramente desde el mundo privado, sin aporte público ni subsidios) y usados mayormente en la construcción de un acueducto de 20 km que va desde la presa a la ciudad. Sin embargo la Corte Suprema de Bolivia declaró nulo el proceso de licitación en respuesta a la contienda legal entablada por el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y las organizaciones locales que se oponían al proyecto Corani.

En vez del proyecto antes mencionado, ellos privilegiaron otra fuente alternativa de abastecimiento de agua, el proyecto Misicuni. Este proyecto debia proveer unos 3,9 m3/ seg a un costo entre 75 y 80 millones de dólares (financiados con un subsidio público el cual aún no estaba garantizado en ese instante) más una suma posterior de 100 millones de dólares de recursos propios de la empresa, totalizando unos 175 a 180 millones de dólares. El Banco Mundial sostenía que el proyecto Corani, que era más económico, era mejor que el proyecto Misicuni. Su fundamento se basaba en que, a pesar de que el proyecto Misicuni, cuando estuviese completo, podría en teoría abastecer de más agua (6,6 m3 /seg), requeriría de dos veces y media más inversión (algunos la estimaron en seis veces más) y se demoraría el doble en estar operando comparado con el proyecto Corani. Como consecuencia de este análisis, el crédito de la Asociación Internacional de Desarrollo, IDA, expiró, impidiendo cualquier aporte adicional de recursos desde el Banco Mundial para este proyecto.

En 1999, la concesión fue nuevamente licitada, pero esta vez privilegiando los intereses regionales y municipales, por lo que el proyecto Misicuni fue parte del contrato. Inicialmente no se recibieron ofertas, pero después, por iniciativa propia, un consorcio llamado Aguas del Tunari (AdT) se presentó. Tras largas negociaciones, finalmente se firmaron los contratos en Septiembre de 1999. Dichas negociaciones fueron encabezadas por el Ministro de Comercio Exterior e Inversiones, la Superintendencia Sanitaria (posteriormente denominada Superintendencia de Sanidad Básica), la Superintendencia de Electricidad, y el Prefecto Provincial. También estaban presentes el Alcalde de la ciudad, el presidente de SEMAPA y el presidente de la empresa Misicuni.

Muchos compromisos fueron hechos con el fin de acomodar todas las concesiones que se hicieron a los distintos interesados, partiendo por la inmediata autorización para la construcción de la polémica obra de la represa de Misicuni, así como la cesión de la deuda de SEMAPA (35 millones de dólares) al consorcio y el pago por la construcción del acueducto desde Misicuni a la ciudad. El contrato de 40 años le daba a AdT control exclusivo sobre todo sistema sanitario industrial, agrícola y residencial, como también un derecho de agua exclusivo sobre el acuífero natural. ⁵

-

⁵ (Baer, 2008)

Los desproporcionados costos de la presa de Misicuni requirieron una inmediata alza de tarifas de un 38%, seguido de un 20% adicional que se aplicaría apenas estuviese en funcionamiento. A principios de Enero de 2000 las tarifas, de hecho, se habían incrementado en un 35% (en promedio). No obstante, AdT había implementado un alza programada de un 10% para los hogares más pobres y de un 106% para las industrias y los hogares de familias acomodadas (otros afirman que las alzas fueron entre un 100% y un 300%). Cuentan que las cuentas de agua saltaron de 12 a 30 dólares en un mes.

Sin embargo, parte de estos incrementos se explican por la gran cantidad de agua adicional consumida producto de un mejor servicio otorgado por la sanitaria privada y, asimismo, por los menores racionamientos⁶. Las alzas de tarifas se requerían dado el mal estado de la infraestructura vigente, y las inversiones necesarias para su mantención, y por el hecho de que se necesitaba extender la infraestructura hacia nuevas áreas. La nueva tarifa reflejaba los costos reales de proveer agua potable y tratar las aguas servidas, costo que antes no era recuperado por la empresa pública⁷.

La gente de Cochabamba sentía que ya habían soportado demasiado y las protestas se desencadenaron intensamente, logrando que el superintendente revirtiera las altas de tarifas en aplicación. Dichas protestas se esparcieron por todo el país, lo que finalmente requirió la intervención militar y la aplicación de la ley marcial. La consecuencia directa de esto fue la muerte de siete protestantes, el despido anticipado del personal de AdT, seguido de la cancelación del contrato el 10 de abril del 2000. El sistema de agua potable de la ciudad, incluida la deuda de los 35 millones de dólares, terminó en manos de la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida, liderada por Oscar Olivera, un vigoroso detractor de la concesión.8

Cochabamba: Intrínsecamente única.

Para los detractores de los procesos de privatización, este caso en estudio contiene todos los errores posibles en una privatización y es usado como referencia a la hora de analizar las múltiples privatizaciones fallidas de las empresas sanitarias de los países en desarrollo. Es fácil difamar al Consorcio Internacional o al Banco Mundial; el agua es un tema que despierta nuestras emociones y las

⁶ Esta visión fue defendida por el portavoz de Bechtel, Gail Apps, quien argumentó que "es importante entender la diferencia entre las tarifas de agua (la tasa unitaria pagada por el agua) y las cuentas de agua, las que dependen de la cantidad de agua que se utiliza en cada momento. Para las personas más pobres, en Cochabamba las tasas se incrementaron poco, apenas 10%". Véase las referencias en (Finnegan *et al.*, 2002)

⁷ Actualmente existe desacuerdo respecto de cuánto aumentaron las cuentas de agua. Franz Chavez, en su artículo, "Bolivia: La Guerra de Agua de Cochabamba", sostiene que las tarifas de agua se incrementaron en 200 %, lo cual significa que las cuentas de agua equivalían a un 20 o 30% de los ingresos de los hogares más pobres. Fredrik Segerfeldt en su libro *Agua para la Venta* argumenta que es más realista un incremento de 43% en los precios, "lo cual implica que los costos de agua equivalen a 1,6% del ingreso promedio de un hogar. Para el 5% más pobre de la población, la cifra corresponde a un 5,4%".

⁸ (Finnegan *et al.*, 2002)

palabras como "privatización" o "Banco Mundial" encienden el debate en cualquier parte del mundo.

No hay duda que Cochabamba fue un intento fallido por privatizar los servicios sanitarios, pero hubo muchísimas razones que explican dicha falla y el conflicto posterior. La falla no puede atribuírsele completamente al Consorcio, al Banco Mundial, o a la privatización en si misma. Hubo aspectos muy particulares en la privatización sanitaria de Cochabamba que pueden calificarse de oscuros- aunque sean raramente mencionados por los grupos antiprivatización cuando hablan del fracaso en el contrato de Cochabamba:

- Cerca de un año antes de firmar el contrato, el regulador aprobó un alza del 20% en la tarifa del servicio sanitario la cual estaba pensada para mejorar la viabilidad financiera de la futura concesión, con el fin de hacer una transición más suave y en teoría aliviar el impacto para los consumidores. Pero una imprecisión legal impidió la aplicación de esta decisión regulatoria. SEMAPA se negó a aplicar el incremento y el regulador no tuvo atribuciones para sancionar a la compañía. Una vez que el contrato entró en vigencia y las tarifas se incrementaron, la gente no apreció una mejora correspondiente en el servicio recibido, con la consiguiente sensación de desilusión.
- El gobierno boliviano hizo grandes avances con el fin de adoptar una ley sanitaria y con ella el establecimiento de un ente regulador, la Superintendencia de Saneamiento Básico. Las reformas no eran viables en el corto plazo, pero con más tiempo y recursos monetarios, sí lo eran plenamente en el futuro. Últimamente el entorno económico y social en que se desenvolvía el regulador no le eran muy favorables. Restricciones presupuestarias y falta de capital humano limitaron la efectividad del regulador durante el conflicto. Las decisiones tomadas por el regulador durante el proceso de concesión fueron gobernadas por el conflicto, con lo cual su accionar se limitó a resolver problemas. Aunque los términos más importantes del contrato ya habían sido publicadas en la prensa, AdT recomendó encarecidamente a la municipalidad el lanzamiento de una campaña que informara a la opinión publica de los términos de la concesión y qué podían esperar de ella en el futuro. Ni la municipalidad ni el regulador intentaron involucrar a la gente en este proceso, lo cual ha quedado a la vista como un error fatal.
- La erradicación de las plantaciones de coca (como parte de un programa auspiciado desde Estados Unidos) ha forzado a muchos agricultores a migrar a Cochabamba, alimentando el ya existente resentimiento contra el

-

⁹ Esto está en directo contraste con el proceso de fijación y ajuste de tarifas que llevó a cabo el Gobierno Chileno previo a la privatización de las empresas sanitarias en 1998. Para mayor información, véase (Maria de la Luz Domper, 2009).

gobierno central. Ello se sumó a un alto desempleo como también un alto empleo informal en la ciudad. Por otro lado, la Ley de Servicios Sanitarios de 1999 se planteó como una amenaza para los regantes, acomodados propietarios y cooperativas, acerca de la posibilidad real de que la concesionaria sanitaria se erigiera como un monopolizador del agua en el área de servicio. Cada entidad comunal, asociación de vecinos, agricultores, indígenas, que administraban derechos de agua podrían quedar operando fuera de la ley. Existía un riesgo real de que todas las obras de infraestructura que poseía la comunidad, incluyendo bienes instalados y manejados por ella, pudiesen ser expropiados por la concesionaria y se les instalaran medidores del servicio a expensas de los usuarios. Finalmente esta situación fue la afrenta que potenció a importantes grupos de interés de Cochabamba y vino a indignar aún más a la población. Aunque esta ley nunca fue implementada, ella fue considerada por la gente como la última gota que derramó el vaso.

• Los dos grupos mayoritarios que representan a los consumidores de Cochabamba (El grupo Coordinadora del Agua y de la Vida, y el Comité Civil) no sólo batallaban contra los intereses externos o extranjeros, como puede sugerir la creencia popular, sino que también contra los intereses locales. Aguas del Tunari era un joint venture entre Aguas Internacionales (55 %), Servicios Urbanos Abengoa de España (25 %) y cuatro compañías Bolivianas (5 % cada una) incluyendo Constructora Petricevic, Sociedad Boliviana de Cemento, Companía Boliviana de Ingenieria e ICE Agua y Energía S.A., todas involucradas en la industria de la construcción y de la ingeniería. A pesar de que se plantea en los registros que el Alcalde de Cochabamba pidió la cancelación del contrato original, (con el Proyecto Corani) dado que no cumplía con el mandato de la ley, se reconoce ampliamente que estos cuatro poderes políticos ejercieron presión en las compañías Bolivianas — que esperaban ganar contratos lucrativos con el Proyecto Misicuni — para usar su influencia y presionar al Alcalde.

En retrospectiva, Menahem Libhaber, el principal Ingeniero en Aguas y Sanitarias del Banco Mundial, ha denominado Cochabamba como una "falla previsible" debido a "la corrupción (ignorancia) del Alcalde, y del Gobierno, con la cooperación del sector privado". En su opinión, la principal enseñanza de Cochabamba es que la corrupción- ya sea liderada por los políticos o el sector privado (en este caso, fueron los políticos), es el mayor enemigo del desarrollo.

Palabras Finales

Últimamente, habían muchos problemas que eran exclusivamente inherentes a Cochabamba, incluyendo los intereses creados en el Proyecto Misicuni, la imperfecta Ley de Servicios Sanitarios, el problema de quienes

-

^{10 (}Nickson & Vargas, 2002)

cultivaban coca y su contribución al malestar social y el contrato negociado precipitadamente a puertas cerradas.

El hecho de que Bolivia era un verdadero patio de recreo del FMI, Banco Mundial y del Banco Inter Americano de Desarrollo, producto de las políticas implementadas en el pasado engendraron un sentimiento anti ccidental y anti privatización muy vehemente.

Los Bolivianos y sus grupos sociales han sido expertos en sacar a empresas de petróleo y gas privadas recientemente, sin mencionar el exitoso caso de las empresas sanitarias de La Paz.¹¹

Usar el fallido caso de Cochabamba como una ícono anti-privatización, no sólo es equivocado sino que también contraproducente. Esto ha desincentivado a los inversionistas privados y continuará haciéndolo. Ellos han dejado regiones que realmente necesitan asistencia técnica e inversiones para dar los servicios básicos de los más pobres.

Si queremos alcanzar la meta de la provisión universal de agua potable y una mayor cobertura del servicio de recolección de aguas servidas, es tiempo de dejar de lado la retórica ideológica, poner a dormir el caso de Cochabamba y asumir una postura más pragmática.

_

conexión.

¹¹ La empresa sanitaria pública de La Paz y El Alto, SAMAPA, fue privatizada en Agosto de 1997. La única oferta provino de Aguas de Illimani, un consorcio propiedad de Suez Lyonnaise des Eaux (hoy Ondeo) en un 34% y el resto propiedad de inversionistas Bolivianos y Argentinos. Fue un proceso altamente exitoso hasta el 2005 cuando los residentes del barrio marginal El Alto se tomaron las calles en protesta por el hecho de que 200.000 residentes fueron excluidos del "área oficial servida", mientras que otros 70.000 residentes fueron excluidos del servicio porque no podían financiar una

El tiempo Presente en Cochabamba

SEMAPA continúa, lamentablemente, desfinanciado y la red de agua potable sufre de un gran desorden. Las tasas de pérdida de agua por filtración se estima sobre el 50%. 12 Se estima que alrededor de la mitad de la población de Cochabamba-es decir una 600.000 personas- permanecen sin conexión a la red de agua potable.¹³ Para otros, el servicio es intermitente en el mejor de los casos con abastecimiento continuo de agua solo por tres a cuatro horas diarias. Como resultado de esto la gente de Cochabamba todavía paga exorbitantes precios por agua comprada a revendedores o se procura aguas de mala calidad. Mientras tanto la gente acomodada o con buenas conexiones políticas continua recibiendo un trato preferencial. En la empobrecida zona sur de la ciudad un cuarto de sus habitantes se abastece de sistema de tanques o de pozos que funcionan independientemente, o si no tienen que abastecerse del pésimo servicio de SEMAPA. Otro cuarto de la gente se confía en el poco frecuente abastecimiento de agua envasada la cual puede costar hasta seis veces más que la tarifa de SEMAPA. El resto de la gente de la zona sur vive en zonas alejadas y debe caminar largas distancias para conseguir agua.¹⁴

Han surgido pequeñas cooperativas lo cual ya es un augurio de un desarrollo promisorio. Mientras tanto SEMAPA esta ahora administrado por "el pueblo" aunque existe una falta de compromiso de la gente de tomar parte en la administración de esta compañía municipal. Muchas de las personas que fueron protagonistas de la guerra del agua exigieron un trabajo en la compañía, haciendo que esta se convierta en una compañía cara e ineficiente que hoy tiene 700 empleados, algo más que los 270 que fueron necesarios en el pasado. Unido a lo anterior, el equipo de ciudadanos directores que fue contratado para manejar la compañía ha sido golpeado por un escándalo de corrupción tras otro, dos de los directores han sido despedidos en los últimos tres años por nepotismo. "Cualquiera sea la causa por la que falló el proyecto de reforma de SEMAPA los resultados están a la vista: después de ocho años los niveles de corrupción son intolerables una vez más" admite Camargo (de SEMAPA).¹⁵

El proyecto Misicuni está siendo revivido nuevamente, aunque suspicazmente sólo una de las cinco empresas interesadas presentó una oferta y esta fue por 79,9 millones de dólares. Se esperaba que comenzaran los trabajos a principios del 2009. Sin embargo, unos 100 millones de dólares adicionales serán necesarios para la construcción del acueducto y parte del proyecto hidroeléctrico. Hasta el momento sólo se han prometido 32,4 millones de dólares, por el gobierno italiano.

¹²(Chavez, 2006)

¹³ (Forero, 2005)

¹⁴ (Rudovsky, 2008)

^{15 (}Rudovsky, 2008)

Me gustaría agradecer a Brian Kennedy, estudiante de Políticas Africanas en el Instituto de Estudios Orientales y Africanos (SOAS) de Londres, por su excelente trabajo de investigación.

Referencias

Baer, Madeline. 2008. "Global Water Crisis, Privatization, and Bolivian Water War," In Whiteley, J.M., Ingram, H. and R.W. Perry (Eds). *Water, Place, & Equity*. Cambridge, Mass: The MIT Press.

Bechtel Corporation. 2002. *Cochabamba and the Aguas del Tunari Consortium*. http://www.bechtel.com/assets/files/PDF/Cochabambafacts0305.pdf

Chavez, Franz. "Bolivia: Cochabamba's 'Water War', Six Years On," *Inter Press Service* November 8, 2006 http://ipsnews.net/news.asp?idnews=35418

Domper, María de la Luz. 2009. *Chile: Un Mercado de Aguas Dinámico*. London: International Policy Press.

Finnegan, William. "Letter from Bolivia: Leasing the Rain," *The New Yorker*, April 8, 2002,

http://www.newyorker.com/archive/2002/04/08/020408fa_FACT1?currentPage= 2

Finnegan, W., Murdock, D. and A. Zinoman. "Bolivia: Leasing the Rain-Timeline: Cochabamba Water Revolt," *PBS Frontline World*, June 2002. http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/bolivia/timeline.html

Forero, Juan. "Bolivians' Dry Mouths: Poor still wait for spoils of 'water wars'," *International Herald Tribune*, December 15, 2005. http://www.iht.com/articles/2005/12/15/business/water.php

Friedman-Rudovsky, Jean. 2008. "Return to Cochabamba: eight years later, the Bolivian water war continues," *Earth Island* Journal, Autumn 2008.

Libhaber, Menahem. "Cochabamba: Concession of the Water and Sewerage Services: A Forecasted Failure," Presentation to Water Sector Board BBL, December 19, 2001.

http://siteresources.worldbank.org/INTEMPOWERMENT/Resources/486312-1095970750368/529763-1095971096030/libhaber2.pdf

Nickson, Andrew and Claudia Vargas. 2002. "The Limitations of Water Regulation: The Failure of the Cochabamba Concession in Bolivia," *Bulletin of Latin American Research*, Volume 21, Number 1, January 2002.

Segerfeldt, Fredrik. 2005. Water for Sale: How Business and the Market Can Resolve the World's Water Crisis. Washington D.C.: The CATO Institute.

David Bonnardeaux

La Guerra de Agua en Cochabamba

United Nations Human Settlements Program (UN-Habitat). 2003. *Water and Sanitation in the World's Cities: Local Action for Global Goals*. London & Sterling, VA: Earthscan.

World Health Organization. "Burden of disease and cost-effectiveness estimates", Water Sanitation and Health (WSH) http://www.who.int/water sanitation health/diseases/burden/en/index.html

Publicado en asociación con:

AgBio World Foundation, USA

Alternate Solutions Institute, Pakistan

CIIMA-ESEADE, Argentina

CEDICE, Venezuela

Centre for Ethics and Technological Development, Nigeria

Frontier Center for Public Policy, Canada

Fundación Atlas 1853, Argentina

International Policy Network, UK

Institut Constant de Rebecque, Switzerland

Instituto de Libre Empresa, Peru

Instituto Liberdade, Brazil

Istituto Bruno Leoni, Italy

Jerusalem Institute for Market Studies, Israel

Liberales Institut, Switzerland

Libertad y Desarrollo, Chile

Lion Rock Institute, Hong Kong

Malaysia Think Tank, Malaysia

Minimal Government Thinkers, Philippines

New Zealand Business Roundtable, New Zealand